



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN
DE SENTENCIAS DE CALI**

SENTENCIA DE TUTELA No. 91

Santiago de Cali, 28 de abril de 2023

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE: INGRID YANETH LUNA PEREA
ACCIONADO: BANCOLOMBIA S.A.
VINCULADO: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
RADICACIÓN: 009-2023-00087-00

I.- OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO

Proveer acerca de la acción de tutela instaurada por el señor INGRID YANETH LUNA PEREA en contra de BANCOLOMBIA S.A. por la presunta vulneración del derecho fundamental de petición.

II.- ANTECEDENTES

Manifiesta el accionante:

"1. Revisada mi información comercial en las Centrales de Riesgos CIFIN (TRANSUNION) y DATACRÉDITO (EXPERIAN), se me informó que cuento con tres reportes negativos relacionado con las obligaciones No. 150086324, 150086325 y 150086326, contraídas con BANCOLOMBIA.

2. Por lo anterior, el día 14 de marzo de 2023, a través de correo electrónico, radique un derecho de petición ante BANCOLOMBIA S.A a fin de obtener la documentación e información en torno a las obligaciones mencionadas.

3. El día 10 de abril del 2023, vía correo electrónico BANCOLOMBIA S.A procedió a brindar respuesta de acuerdo a la petición elevada anteriormente. la notaría 18 del círculo de Cali. Pero al realizar esta dación el pago, no se canceló la Hipoteca Abierta de cuantía indeterminada contenida en la anotación Nro.001 del certificado de tradición 370- 475420.

4. No obstante, en la revisión de la solicitud, detallando si esta fue respondida de manera completa, encuentro que la entidad accionada no le dio respuesta de manera correcta a los puntos 3, 7, 8, 9 y 10.

5. En relación al numeral 3 del derecho de petición, BANCOLOMBIA no suministro documentación donde se pueda ver el histórico de pagos por las obligaciones citadas.

6. En relación al numeral 7 del derecho de petición, la entidad no me informo la fecha DD/MM/AA en que ingrese en mora por cada una de las obligaciones, solo me indico que estaba en mora.

7. En relación al numeral 8 del derecho de petición, BANCOLOMBIA no me informo la fecha (DD/MM/AA) en que fui reportado negativamente por las obligaciones No. 150086324, 150086325 y 150086326.

8. En relación a los numerales 9 y 10, la entidad accionada no me suministró las cartas de preaviso enviadas a mi domicilio. Tampoco, se allego constancia de recibido de estas".

Por lo que finalmente solicita:

“Con fundamento en los hechos relacionados, solicitó de manera atenta y respetuosa señor juez, disponer y ordenar a la parte accionada BANCOLOMBIA S.A y, a mi favor lo siguiente:

1. ORDENAR a la entidad BANCOLOMBIA emitir respuesta clara y precisa con respecto a los numerales 3, 7, 8, 9 y 10 del derecho de petición radicado el día 14 de marzo del 2023”.

III.- TRÁMITE PROCESAL

El Juzgado profirió auto interlocutorio No. 1080 del 19 de abril de 2023 en el cual admitió la Acción de Tutela. De igual forma se le concedió a la parte accionada un término de dos (02) días para su contestación.

Contestación de la parte accionada:

BANCOLOMBIA S.A.

A pesar de haber sido notificado, guardó silencio en el término concedido.

IV.- CONSIDERACIONES

1.- Este despacho es competente para asumir y definir el trámite constitucional iniciado por la accionante.

2.- El problema jurídico que se somete a consideración del despacho estriba en determinar si existe o no vulneración del derecho fundamental de la parte accionante, a cargo de la parte accionada.

3.- La acción de tutela ha sido concebida, como un procedimiento preferente y sumario para la protección efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular en los casos que determine la ley.

Así las cosas, la efectividad de la acción, reside en la posibilidad de que el juez si observa que en realidad existe la vulneración o la amenaza de derechos fundamentales de quien solicita protección, imparta una orden encaminada a la defensa actual de la garantía constitucional afectada.

V.- MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

Como mecanismo de carácter constitucional, la acción de tutela está encaminada a la protección de los derechos fundamentales de la persona. No obstante, esta protección se hace extensiva a derechos económicos, sociales y culturales, o colectivos, cuando estos están en íntima conexión con derechos catalogados como fundamentales, de tal forma que su no amparo causaría la vulneración de aquellos.

1.- El derecho fundamental de petición

En relación con el sentido y alcance del derecho de petición, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha trazado algunas reglas básicas acerca de la procedencia y efectividad de esa garantía fundamental:

“El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; la petición

debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible; la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa; la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder y ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado.”¹

Como lo ha manifestado la Corte Constitucional, el derecho de petición es un derecho fundamental, cuya efectividad resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la participación de todos en las decisiones que los afectan, así como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido instituidas².

2.- Término establecido en la normatividad para contestar derecho de petición.

Frente a este punto, es importante resaltar que la Ley 1755 de 2015 por medio de la cual se reguló el Derecho Fundamental de Petición determinó que:

*“Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, **toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.** Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:*

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

*2. **Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.***

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”. (Resaltado propio).

Así las cosas, atendiendo a que el Derecho de petición es de carácter fundamental, la carencia de respuesta de fondo y **oportuna**, puede conllevar a la intervención del juez constitucional en virtud del ejercicio de la acción de tutela. En ese sentido, la respuesta deberá generarse dentro del término legal establecido y deberá notificarse en debida forma al peticionario.

Con los anteriores fundamentos legales y jurisprudenciales estudiados entra el Despacho a resolver el caso en concreto.

¹ Sentencia T-511 de 2010

VI.- CASO CONCRETO

Como primera medida es de indicar que en el presente caso se cumplen con el requisito de inmediatez, toda vez que la presente acción fue promovida en un término razonable, prudencial y cercano a la ocurrencia de la afectación al derecho fundamental de petición, en tanto este fue radicado el 14 de febrero de 2023, por lo que al momento de interponer la presente acción constitucional han transcurrido 33 días de su presentación, frente al segundo requisito se observa que no existe otro medio eficaz que pueda salvaguardar de forma oportuna el derecho fundamental invocado.

En el caso sometido a estudio se tiene que el accionante CRISTHIAN CAMILO LASSO presentó derecho de petición el día 14 de febrero de 2023 ante Bancolombia, sin que, a juicio de la accionante, se diera respuesta de manera correcta a los puntos 3, 7, 8, 9 y 10 en los que solicitó:

3. Se le envié copia legible del histórico de pagos de la obligación mencionada, en el cual se me expliqué claramente a qué rubros y en que fechas aplicaron cada uno de los pagos, esto con la finalidad de comprobar la existencia de la mora.

R//No han realizado pagos a las obligaciones ***6324, ***6325, ***6326.

6. En relación al numeral 7 del derecho de petición, la entidad no me informo la fecha DD/MM/AA en que **ingrese** en mora por cada una de las obligaciones, solo me indico que estaba en mora.

7. Se me **INDIQUE** de forma clara, precisa y detallada la fecha en que ingresé en mora por primera vez por cada una de las obligaciones a mi nombre, expresada la fecha en DÍA/MES/AÑO.

R// Se informa que las obligaciones terminadas ***6324, ***6325 y ***6326 registran en estado mora al corte de febrero de 2023.

7. En relación al numeral 8 del derecho de petición, BANCOLOMBIA no me informo la fecha **(DD/MM/AA)** en que fui reportado negativamente por las obligaciones No. 150086324, 150086325 y 150086326.

8. Se le indiqué de forma clara, precisa y detallada la fecha en que fui reportado negativamente por primera vez para cada una de las obligaciones a mi nombre, expresada la fecha en DÍA/MES/AÑO.

R// las obligaciones terminadas ***6325 y ***6326 agosto de 2021, para la obligación terminada en ***6324 no se encontró notificación por lo cual se corrige a la fecha.

8. En relación a los numerales 9 y 10, la entidad **accionada** no me suministró las cartas de preaviso enviadas a mi domicilio. Tampoco, se allego constancia de recibido de estas.
9. Se me **ENVÍE** copia de la comunicación previa al reporte de la información, con su respectiva constancia de envió y recibo de mi parte en mi domicilio, tal como lo establece el artículo 8 de la ley 1266 de 2008.

10. Se me **BRINDE** copia del formulario y/o solicitud donde se pueda apreciar tanto la dirección de correo y/o física donde fui notificada y mi firma, a fin de comprobar mi aceptación.

Así las cosas, tenemos que la naturaleza jurídica del derecho de petición, consagrado en el art. 23 de la Constitución Política y ahora elevado a Ley estatutaria, mediante Ley 1755 del 30 de junio de 2015, el cual es considerado básicamente como la facultad que tienen los ciudadanos de formular solicitudes o de pedir copias de documentos no sujetos a reserva, a las autoridades correspondientes y a las organizaciones e instituciones privadas y obtener de éstas una pronta y completa respuesta sobre el particular.

Dicha Ley potencializa la protección de este derecho fundamental, determinando entre otras cosas que ninguna entidad privada- sea organización o institución- podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas, so pena de incurrir en sanciones y multas por parte de las autoridades competentes.

En relación con el contenido y alcance de dicho derecho la Corte ha explicado que es un derecho fundamental y que su contenido esencial comprende varios elementos, a saber: la posibilidad de acudir ante la administración y organizaciones privadas para elevar solicitudes y recibir respuesta que debe ser oportuna, de fondo y comunicada al peticionario.

En sentencia C-510 de 2004, la Corte expresó, con reiteración de su propia jurisprudencia:

“Es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; su contenido esencial comprende los siguientes elementos: a.-) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b.-) La respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c.-) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados, excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d.-) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario con independencia de que su sentido sea positivo o negativo”.

Así mismo se ha indicado por la H. Corte que la respuesta a un derecho de petición, ES SUFICIENTE, cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario; ES EFECTIVA, si soluciona el caso que se plantea; y ES CONGRUENTE, si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta.

Por consiguiente, se perfecciona este derecho cuando la persona obtiene por parte de la entidad demandada una respuesta de fondo, clara, oportuna y en un tiempo razonable a su petición.

Descendiendo al caso que nos ocupa, se tiene que la entidad accionada BANCOLOMBIA S.A., guardó silencio a la presente acción de tutela, por lo que obliga al Juez de Tutela aplicar el principio de veracidad consagrado en el art. 20 del Decreto 2591 de 1991 que señala presumir como ciertos los hechos consagrados en el escrito tutelar.

Al respecto la Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos como la sentencia T-260-2019, ha señalado la aplicación de este principio cuando:

“ (...) requiera informes al sujeto o a los sujetos demandados y estos omitan responder o lo hacen pero de manera extemporáneamente o meramente formal;

(ii) tiene dos finalidades, sancionar la negligencia del sujeto pasivo demandado ante el descuido frente al ejercicio de la acción de tutela y el llamado del juez constitucional y proteger de manera eficiente los derechos comprometidos, en concordancia con la naturaleza subsidiaria y sumaria de la tutela; y (iii) la aplicación de la presunción de veracidad es más rigurosa cuando el demandante es un sujeto de especial protección constitucional o se encuentra en condición de vulnerabilidad teniendo en consideración que, en muchas oportunidades, se dificulta la carga probatoria para el actor y, en contraste, el sujeto accionado tiene facilidad de aportar el material correspondiente, en estas oportunidades la Sala Plena de esta Corporación ha señalado que resulta “de elemental justicia que sea la parte privilegiada y fuerte, por su fácil acceso a los materiales probatorios en cuestión, quien deba asumir dicha carga procesal”.

De esta manera, en aplicación al principio de veracidad se tendrá como hecho cierto, la falta de respuesta a los puntos 3, 7, 8, 9 y 10 frente a la petición radicada por la accionante vía correo electrónico el día 14 de marzo de 2023; por lo que se considera procedente amparar el derecho fundamental de petición del actor y en consecuencia se ordenará al BANCOLOMBIA S.A., que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia proceda a responder de fondo los aludidos puntos del escrito de petición en cita.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Noveno Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: TUTELAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN elevado por la señora INGRID YANETH LUNA PEREA contra BANCOLOMBIA S.A. por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: ORDENAR a BANCOLOMBIA S.A., que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación proceda a responder de fondo los puntos 3, 7, 8, 9 y 10 de la petición radicada vía correo electrónico el día 14 de marzo de 2023, por la accionante INGRID YANETH LUNA PEREA, conforme lo expuesto en la presente providencia.

TERCERO: NOTIFÍQUESE a las partes por el medio más expedito. No obstante, ante la eventual imposibilidad de enterar a las partes o a terceros interesados en las resultas de la presente acción constitucional, súrtase dicho trámite por AVISO el que deberá fijarse en la página web de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de esta ciudad.

CUARTO: De no ser impugnado el presente fallo, se dispone ENVIAR la presente acción de tutela a la HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL para su eventual revisión, en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 32 del decreto 2591 e1991.

QUINTO: Una vez consultada en SIICOR la exclusión de la presente tutela, por secretaria archívese.

NOTIFÍQUESE

ANGELA MARÍA ESTUPIÑÁN ARAUJO
JUEZ